

CRISIS BÉLICA EN ORIENTE PRÓXIMO

El Gobierno ultima medidas fiscales para contener el precio de energía y carburantes

RECABA LAS PETICIONES DE LOS AGENTES SOCIALES/ El Gobierno prepara para “los próximos días” un plan para paliar los efectos de la guerra en Irán que incluye asistencia al campo y el transporte, el despliegue de ERTE y reactivar parte del escudo social.

Juande Portillo. Madrid

El plan de respuesta del Gobierno frente al impacto económico en España del conflicto en Oriente Próximo incluirá medidas fiscales para contener los precios de la energía; iniciativas específicas para moderar el coste de los carburantes, con especial atención al campo y los transportistas; el rescate de parte del malogrado escudo social y el despliegue de mecanismos de protección del empleo. Así lo anunció ayer el titular de Economía, Carlos Cuerpo, tras una reunión de los ministros económicos del Ejecutivo con empresarios y sindicatos para debatir las medidas a tomar, que se aprobarán “en los próximos días” y “con la mayor celeridad posible”, aunque no aclaró si eso será en el Consejo de Ministros del próximo martes.

Cuerpo aprovechó la ocasión para enviar un “mensaje de tranquilidad” a la ciudadanía, asegurando que “estamos aún lejos de la situación que se dio en 2022 con la guerra de Ucrania”. “A España nos pilla con los deberes hechos en materia de seguridad energética, por nuestra apuesta por las renovables y la electrificación de la economía; por la diversificación de las fuentes de abastecimiento y por las infraestructuras, en materia de transporte, pero también refinera o regasificación”, dijo.

Utilizará inteligencia artificial para vigilar los precios en las 12.600 estaciones de servicio de España

Busca alternativas a la bonificación de 20 céntimos por litro de 2022 para garantizar su impacto en precio

Evita concretar si el paquete se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes

Cuerpo reclama “tranquilidad”: “Estamos lejos de la situación de la guerra de Ucrania”

A partir de ahí, el ministro reveló que “el esqueleto del plan del Gobierno” incluye cuatro bloques de iniciativas. En primer lugar, “medidas fiscales” para “la minimización del coste de la electricidad y de la energía”, en línea con las aprobadas tras la invasión rusa sobre Ucrania. Conviene recordar, que entonces el Ejecutivo llegó a rebajar el IVA de la luz del 21% al 5%, rebajó del 5,11% al 0,5% el Im-



Los ministros de Seguridad Social, Energía, Trabajo, Economía y Hacienda, durante la reunión de ayer con los agentes sociales.

puesto Especial sobre la Electricidad; y suspendió el Impuesto a la Producción de Energía Eléctrica del 7%.

En segundo lugar, agregó Cuerpo, se actuará para aliviar “el impacto de la subida del precio de los combustibles con especial atención a sectores como el del campo o el del transporte por carretera” –y la “logística”, añadió luego–, los más afectados por el encarecimiento de los carburantes, y

en especial del diésel. En este sentido, sin embargo, Cuerpo reveló que las opiniones recabadas entre agentes sociales y sectores afectados invitan a descartar el uso de la bonificación fiscal de 20 céntimos por litro de carburante puesta en marcha en 2022, y que el Gobierno trabaja en el diseño de medidas alternativas que garanticen mejor su traslación a precios. El objetivo, adujo, es garantizar que “se están sir-

viendo las materias primas a los mejores precios posibles a los ciudadanos y con garantías de competencia”.

En este sentido, Economía llevará a cabo una vigilancia reforzada de los precios de la mano de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Además, desveló, la efectividad de las medidas se medirá utilizando inteligencia artificial para fiscalizar los precios aplicados

en las 12.600 estaciones de servicio de todo el país.

En tercer lugar, el Ejecutivo aprovechará para relanzar parte del malogrado escudo social –rechazado dos veces por el Parlamento al incluir la suspensión de desahucios– como la prohibición del corte de suministros a familias vulnerables o el bono social eléctrico, así como el despliegue de mecanismos de protección laboral como los ERTE.

Los sindicatos instan a limitar los márgenes empresariales

G. D. Velarde / J. Portillo. Madrid

Más allá de diseñar el plan de apoyo económico frente a la guerra de Irán, el Gobierno tiene el reto de hilar fino para conjugar las pretensiones de empresarios y sindicatos, a pesar de que los agentes sociales coinciden en aspectos nucleares como la monitorización del impacto del conflicto antes de tomar medidas de gran espectro. Y también en precisar los sectores económicos y de población más afectados para centrar en ellos el grueso de ayudas.

Mientras que UGT y CCOO reclaman al Ejecutivo

que se aborden bonificaciones para fomentar el uso del transporte público –y así reducir el consumo de combustible– y reclaman que se ponga límite a los precios de los arrendamientos, fuentes empresariales señalan a EXPANSIÓN que han pedido al Gobierno centrar las ayudas en rebajas fiscales. Concretamente, apuntan a la posibilidad de reducir los impuestos sobre los hidrocarburos, el IVA de la luz y del gas, como medidas más inmediatas.

Argumentan los empresarios en este sentido que antes de poner en marcha ayudas a

modo de subvenciones se busque aliviar la carga fiscal. Por ejemplo, calculan desde la patronal que con el actual nivel de precios del combustible se estarían ingresando unos 300 millones de euros más semanales en impuestos.

Sobre la posibilidad de que las ayudas aparezcan a modo de rebajas fiscales, los sindicatos exigen al Gobierno un control férreo de los márgenes empresariales para que se produzca una contención de los precios y no un mayor beneficio para las compañías.

“Tenemos que hacer una monitorización permanente

de la guerra y plantear de forma escalada las medidas para hacer frente a las consecuencias. Sin alarmismos, pero con visión de precaución y anticipación a lo que pueda ocurrir”, señaló el secretario general de CCOO, Unai Sordo, reclamando “una memoria económica con el coste de todas las medidas”.

“No hay tiempos para la concreción de las medidas”, matizaba Sordo sobre cuándo se pondrían en marcha las ayudas, instando a actuar para “controlar los precios de los combustibles y el previsible pico de inflación en el corto

plazo” con medidas de “contención de precios, protección de las familias y, llegado el caso, de protección de los empleos”. Ante todo, pidió que las medidas que se tomen sirvan realmente para “favorecer la contención de los precios” y no para “mejorar los márgenes empresariales”.

Del mismo modo, para UGT “es muy importante que se ponga el foco” en limitar los márgenes de beneficio de los grandes surtidores de combustible, aludiendo a que el precio medio del gasóleo es de 1,8 euros por litro pero llega a 2,13 en grandes cadenas.

“El transporte está sufriendo de manera muy importante ya y pensamos que el resto de medidas, como las relacionadas con el precio de la vivienda”, tienen que ir adoptándose en función de la renta de las familias, defendió Álvarez. De momento, eso sí, UGT considera que no está habiendo afectación en el mercado laboral que requiera medidas.

En este sentido, los sindicatos aseguraron no compartir ninguna bajada generalizada de impuestos, ya que supondría “desarmar fiscalmente al Estado cuando más se necesita de la acción” pública.